



MIL MILLONES DE VOCES

PARA LA EDUCACIÓN

#MilMillonesDeVoces

**Llamada a la acción:
"Mil millones de voces"**

1.000 millones de voces (One Billion Voices)

Una llamada a la acción para mejorar e incrementar la financiación pública para la educación

La campaña “1.000 millones de voces” (One Billion Voices) liderada por la Campaña Mundial por la Educación (CME) tiene como objeto abordar urgentemente la crisis educativa global provocada por la pandemia de la COVID-19 y garantizar la mejora y el incremento en la financiación pública para la educación como bien público global.

- Durante el pico de la pandemia de la COVID-19, se calcula que unos 1.500 millones de estudiantes vieron cómo se detenía o interrumpía su educación¹. Los sistemas educativos continúan enfrentándose a una crisis devastadora, los retos que rodean la financiación pública y la siempre creciente presión sobre los servicios públicos tienen como resultado una menor prioridad de la educación. Aunque algunos estudiantes han regresado a la escuela, las medidas de confinamiento han agrandado la brecha digital debida a la inequidad social y de género, la que sufren muchas comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y exclusión, las niñas y niños con discapacidades y otros grupos especialmente vulnerables como refugiados y desplazados internos.
- La pandemia ha hecho retroceder los progresos en el derecho a la educación de las últimas décadas y está teniendo un efecto devastador en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4) de la educación de calidad, especialmente para las niñas y grupos más vulnerables, además de muchos de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben alcanzarse para 2030.
- Según previsiones del Banco Mundial, habrá recortes potenciales del 10% en los presupuestos educativos debido a la pandemia de la COVID-19². Las medidas de austeridad no son una salida para una crisis económica.

Este documento presenta un grupo de recomendaciones dirigidas a los diferentes actores implicados en educación en todos los países, con el fin de orientar la labor de defensa de la educación pública de calidad y lograr una mejora y un aumento de la financiación pública para la educación. Si elevamos millones de voces por la educación y trabajamos juntos como movimiento global, lograremos una mejor educación para todos y todas.

¹ <https://en.unesco.org/news/learning-never-stops-tell-unesco-how-you-are-coping-covid-19-school-closures-0>

² Informe político del Banco Mundial, mayo de 2020

<http://pubdocs.worldbank.org/en/734541589314089887/Covid-and-Ed-Finance-final.pdf>

A nivel general

1. Los Estados deben aumentar y mejorar la financiación interna para la educación.

Los Estados deben cumplir sus compromisos adquiridos en el Marco para la acción 2030 de Incheon, para proteger el progreso realizado hacia el logro del ODS4. Los recursos internos siguen siendo la fuente más importante de financiación de la educación, suponiendo alrededor del 97% de la financiación total de la educación³. Debe existir, por tanto, un compromiso de financiación claro por parte de los Estados especialmente orientado a responder a las necesidades de los colectivos más vulnerables y marginados para ofrecer una educación inclusiva y de calidad que reduzca la desigualdad, la discriminación y la exclusión.

Siguiendo el compromiso con los acuerdos internacionales existentes, la CME urge a que los estados aseguren que al menos se destina a educación una cantidad equivalente entre el 4 y el 6 % del producto interior bruto (PIB), y/o una cantidad equivalente del 15 al 20 % del gasto público a la educación.

2. Los Estados deben avanzar hacia la justicia fiscal que permita aumentar los recursos internos disponibles para la educación y otros servicios públicos.

Son necesarias importantes reformas fiscales para responder a los retos de la Agenda 2030 y aumentar el tamaño de los presupuestos de los Estados. La CME considera que la única forma práctica y realista de conseguir estos incrementos pasa, por una parte, por maximizar los ingresos disponibles creando sistemas impositivos internos progresivos y combatiendo las lagunas legales que permiten la elusión y la evasión de impuestos por parte del sector privado, a través de los cuales los países en desarrollo pierden 138.000 millones USD al año⁴; y por otro lado, los Estados deben también examinar nuevas fuentes de impuestos y alcanzar una presión fiscal mínima del 20 % de sus PIB. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la mayoría de países podría incrementar su presión fiscal en un 5 % del PIB a medio plazo (de 3 a 5 años).

La CME cree firmemente que contribuir con impuestos justos es una obligación moral y un prerrequisito para aquellos actores privados que desean contribuir al debate sobre políticas educativas y que todos los países deberían desarrollar estrategias ambiciosas para hacerlo empleando impuestos justos y progresivos.

3. Debe actuarse urgentemente respecto al servicio de la deuda, incluyendo la cancelación de la deuda para los países menos desarrollados.

³ Comisión de educación: La generación de aprendizaje, <https://report.educationcommission.org/report/>

⁴ Devex, un sistema fiscal global justo, <https://www.devex.com/news/a-fair-global-tax-system-is-imperative-for-development-experts-say-90448>

La asignación de recursos financieros internos para pagar el servicio de la deuda en lugar de garantizar a las personas sus derechos humanos básicos, influirá significativamente en el desarrollo de esos países a corto y largo plazo si no se actúa urgentemente para aliviar o cancelar la deuda. Los análisis revelan que 40 de 80 países han implementado “recortes de gasto por valor del 2,6 % del PIB, en 2020”⁵.

Con el objeto de liberar recursos internos para que estén disponibles para aumentar la inversión en servicios públicos, la CME reclama:

- La urgente cancelación de la deuda para los países menos desarrollados y de menor desarrollo;
- el alivio de la deuda para países de ingresos medios y países de ingresos medio-altos;
- permutas de deuda sujetas a acuerdos firmados por los países para invertir en educación, para países con ingresos medios y altos con estrés por deuda;
- un nuevo compromiso o convenio de acreedores y deudores para requerir plena transparencia en el acuerdo de futuros préstamos.

4. Los Estados deben garantizar que los sistemas educativos promuevan la equidad, la igualdad y un enfoque en los grupos más marginados.

Esto implica que las barreras que excluyen a algunos estudiantes del acceso, la permanencia y la titulación en la educación deben abordarse en todos los aspectos de la vida social y escolar. Para ello, el gasto en educación pública debe cubrir todos los niveles y modalidades y enfocarse en garantizar el acceso y aprendizaje de calidad para los más vulnerables, incluyendo niñas y adolescentes, estudiantes en contextos de conflictos y desastres, refugiados, pueblos indígenas, personas en áreas remotas, personas con discapacidades y otros grupos excluidos.

A pesar de ser prioritaria para niñas, niños, jóvenes y sus familias, la educación en emergencias suele ser ignorada en las respuestas humanitarias y en las acciones posteriores de recuperación. Esto ha resultado evidente en los planes de respuesta ante la COVID-19 en todo el mundo. La educación y el aprendizaje deben ser una prioridad en los planes de emergencia, y deben financiarse en su totalidad. Desde 2010, menos del 2 % de la financiación humanitaria se ha dedicado a la educación⁶. Igualmente, debe existir un foco prioritario en la atención a las necesidades y riesgos a los que se enfrentan las niñas y adolescentes en estos contextos. La pandemia de la COVID-19 ha incrementado el número de matrimonios infantiles y violencia de género, lo que actúa como barrera para que las niñas regresen a la escuela.

5. Los Estados deben proveer una educación gratuita de calidad para todos y todas y terminar con la tendencia hacia la comercialización de la educación, especialmente en las llamadas "escuelas privadas de bajo coste".

⁵ Munevar's 2020:1

⁶ La Educación no puede esperar, 2018, <https://www.educationcannotwait.org/the-situation/>

La CME urge a terminar con la tendencia actual de incremento de la privatización y comercialización de la educación surgida antes de la irrupción de la COVID-19 y que se ha acelerado desde entonces. La CME considera que la financiación pública debe siempre tener el objetivo de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos, tal como se establece en las normas internacionales de Derechos Humanos, y todas las instituciones privadas deben ser rigurosamente reguladas en virtud de las leyes nacionales, especialmente las llamadas "escuelas privadas de bajo coste", que acumulan numerosas quejas por prácticas de explotación laboral, discriminación, falta de transparencia y fracaso a la hora de cumplir los estándares nacionales de educación, salud y seguridad.

La CME considera que la creciente privatización y comercialización de la educación incrementa la desigualdad en su acceso y profundiza la desigualdad económica, debilitando el progreso hacia una educación pública de calidad. La CME pide que el vínculo entre calidad y privatización se cuestione e investigue en mayor medida y que las escuelas privadas rindan cuentas de los mismos estándares que las escuelas ordinarias y se controlen del mismo modo.

6. Los Estados deben invertir en la mejora de la docencia; en su formación de acceso y continua, en su remuneración y en sus condiciones de laborales.

La pandemia de la COVID-19 supone un desafío para los sistemas públicos y la profesión docente ha estado, al igual que otros colectivos, al frente de la respuesta, liderando el camino para encontrar e implementar soluciones creativas e innovadoras y crear nuevos entornos de aprendizaje para sus estudiantes. Una movilización docente que, sin embargo, se ha producido en la mayoría de los países, a pesar de las difíciles condiciones laborales, la falta de medios, apoyo y reconocimiento que la profesión docente venía experimentado antes de la pandemia.

En todo el mundo, el profesorado, con una amplia mayoría de mujeres, se ha tenido que adaptar y dar clase online, careciendo a menudo de la formación y las herramientas básicas de tecnologías de la información y comunicación (TIC), luchando con una realidad en la que, según la UNESCO alrededor del 50 y el 43 % de los estudiantes no tienen, respectivamente, ordenadores e internet en casa⁷. En este sentido, una reciente encuesta global a profesores realizada por ActionAid mostró que, aunque la mayoría de escuelas (81%) tomaron alguna medida para el aprendizaje a distancia, el 76% del profesorado afirmó que menos de la mitad de sus alumnos pudieron seguir las lecciones.

El mayor obstáculo al que se enfrentan los países que quieren contratar más docentes o pagarles más son las restricciones del FMI que instan a los países a congelar o recortar la nómina del sector público (en el 78% de los países en los últimos 3 años). El pago de nóminas a los y las docentes es el mayor grupo dentro de la mayoría de los presupuestos de educación, más del 90% del mismo se dedica a esta partida. El gasto en educación no puede aumentarse sin aumentar el gasto en los y las profesoras. Los gobiernos deben forzar las restricciones del FMI que ponen por delante el control del

⁷ Informe de la UNESCO sobre el día Mundial del Profesor <https://en.unesco.org/sites/default/files/wtd2020-overview-en.pdf>

déficit a la inversión pública, siendo contradictorio al reconocimiento por parte de todos los actores de que sólo con una fuerte inversión en educación los Estados avanzarán y progresarán en lo económico en el medio y largo plazo.

7. Los países desarrollados deben continuar trabajando hacia el objetivo del 0,7 % de Ayuda Oficial al Desarrollo, y dedicar, al menos un 20 % de la misma a educación.

La CME insta a que los países desarrollados cumplan el compromiso de alcanzar el 0,7% de su RNB para destinarlo a Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y dedicar el 20 % de esa AOD a educación, para así asegurar una financiación puntual y predecible para lograr el ODS4. Una AOD en educación que debe incrementarse mejorando la efectividad promoviendo el apoyo a fondos como la Alianza Mundial por la Educación (AME) y “Education Cannot Wait” (ECW) con el objetivo de promover una mejor coordinación y coherencia, y llegar a los colectivos más desfavorecidos de aquellos países en mayores dificultades y en donde hay más impedimentos para que los donantes individuales viertan su ayuda. La CME considera que la AME debe jugar un papel de liderazgo en el incremento de la financiación a la educación de la infancia con un enfoque de género para todos los países con necesidades, y por eso apoya el proceso de reabastecimiento de este fondo que pretende garantizar al menos 5.000 millones dólares para los próximos 5 años y solicita a los donantes que se unan a este esfuerzo multilateral.

Con una financiación puntual y predecible de muchos donantes desde su fundación en 2016, la ECW ha llegado a casi 3,5 millones de niños y jóvenes a finales de 2019 en 30 de las peores crisis humanitarias del mundo, pero se necesitan otros 300 millones de dólares para apoyar la respuesta a la educación en la emergencia de la pandemia de la COVID-19.

La CME considera también que la ayuda multilateral y de donantes debe evitar toda forma de endeudamiento de países de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales se encuentran en un estrés de deuda alto o moderado, y en un momento de creciente vulnerabilidad por la deuda, como documentan actores de la sociedad civil y el FMI. Los mecanismos de préstamo no proporcionan fuentes de financiación predecibles y sostenibles que ayuden a los gobiernos a realizar inversiones a largo plazo necesarias para mejorar la educación.

La CME también está preocupada por la fragmentación de la financiación internacional de la educación, que ha llevado muchos años crear como una arquitectura global armonizada, y nos preocupa el papel de los bancos multilaterales como impulsores de la reforma educativa, considerando su historial de falta de transparencia, dedicación efectiva y apoyo a los sistemas educativos públicos.

Igualmente, la CME recomienda reconocer y promover el rol de la sociedad civil organizada para ejecutar la AOD.

8. Los Estados deben promover, alentar y encauzar el diálogo activo constante con la comunidad educativa y la sociedad civil en su conjunto, ofreciendo espacios seguros para ello.

Más de 1.000 millones de personas han visto como su proceso de aprendizaje se ha visto paralizado por la pandemia. La CME está comprometida con ellos y quiere contribuir a elevar sus voces y testimonios para abordar la mayor crisis educativa de la historia. La CME está aquí para ayudar a fortalecer la red global comunitaria para la educación. Es fundamental que la sociedad civil, las personas y los y las activistas tengan un espacio y una oportunidad de solicitar de forma segura la provisión del derecho humano a la educación.

En este contexto de pandemia, hemos comprobado cómo la opinión de docentes, familias y especialmente del alumnado, no ha sido tenida en cuenta en ningún momento, no se le ha consultado ni valorado a la hora de afrontar cambios en la vuelta a las aulas. Se deben poner en marcha mecanismos y espacios donde estas opiniones tengan relevancia y poder de influencia en la toma de decisiones.

Peticiones al Gobierno español

En su acción exterior

1. El Gobierno español debe continuar trabajando hacia el objetivo del 0,7 % de AOD y dedicar un 20 % de la misma a la educación.

El incremento de la AOD en el presupuesto 2021 en 400 millones de euros es una noticia que aporta cierta esperanza a la recuperación de la política pública más castigada durante la anterior crisis económica. Hay que recordar que la AOD se ha recortado un 80% entre 2008 y 2018 y que los últimos datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE para 2020 señalan que España había destinado el 0,24% de la RNB a esta partida, un porcentaje muy inferior a la media europea (0,46%) y por detrás de países como Hungría. El incremento de los 400 millones en 2021 que colocarán a nuestro país por encima del 0.2% de la RNB, aunque está lejos de la cifra de 900 millones de euros que reclamaba la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España, es una señal positiva del compromiso gubernamental de destinar el 0,5% de la RNB en AOD para el final de la legislatura. Un camino que debe de seguir impulsando para recuperar, no sólo el lugar que le corresponde entre otros donantes de similar peso, sino como reflejo del compromiso de nuestra sociedad por el apoyo a los países más vulnerables.

Desde la Coalición española de la CME se solicita que, de los fondos de la AOD, al menos el 20% se dedique a educación.

2. Apoyar el esfuerzo multilateral de la comunidad internacional por la educación.

La Coalición española de la CME pide que nuestro país se sume al esfuerzo multilateral que se refleja en el apoyo a determinados fondos internacionales que tienen como destino la educación, como son el fondo de la Alianza Mundial por la Educación (AME) y el fondo “Education Cannot Wait”.

En el caso de la AME, en el último periodo de reposición en 2018, España comprometió tan solo 1,5 millones de euros, una cifra inferior a la comprometida por Senegal. En esta primera mitad de año tendrá lugar la siguiente ronda de reabastecimiento de dicho fondo y es una oportunidad para que nuestro país recupere su rol de donante en educación y haga un compromiso amplio hasta 2025 en línea con lo que hacen otros países de nuestro entorno y peso, como Francia o Alemania.

3. Apoyar el esfuerzo y el rol de la sociedad civil organizada como ejecutora de fondos de la AOD.

La sociedad civil organizada trabaja desde hace décadas en conexión con organizaciones locales que conocen a fondo las necesidades reales de las comunidades más desfavorecidas de los países en donde nuestra cooperación está presente.

4. Actuar urgentemente respecto al servicio de la deuda, incluyendo medidas que alienten la inversión en servicios públicos básicos como la educación.

Elegir destinar los escasos recursos financieros internos para pagar el servicio de la deuda frente a promover una inversión que genere estados más sólidos y fuertes para afrontar esta crisis y salir de la misma no es inteligente en el medio y largo plazo. En este sentido, la Coalición española de la CME reclama las siguientes medidas:

- La urgente cancelación de la deuda para los países menos desarrollados y de menor desarrollo;
- el alivio de la deuda para países de ingresos medios y países de ingresos medio-altos;
- canjes de deuda acordados por los países para invertir en servicios públicos como la educación para aquellos países con ingresos medios y altos con estrés por deuda;
- un nuevo compromiso o convenio de acreedores y deudores para requerir plena transparencia en el acuerdo de futuros préstamos.

5. No olvidar la inversión en Educación para la Ciudadanía Global.

El compromiso de Estados como el nuestro con la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS) requiere por parte de nuestro Gobierno de un compromiso con la inversión en Educación para la Ciudadanía Global (EpCG).

La EpCG es una de las principales herramientas de la que disponen los Estados para que su ciudadanía se implique en la consecución de los retos de la Agenda 2030. Ninguno conseguirá alcanzar los ODS si no hay una mayoría de personas detrás que entiendan las implicaciones, interrelaciones y transformaciones necesarias que supondrán las nuevas políticas que se deban poner en marcha para cumplir con sus objetivos.

En este sentido, se solicita mayor atención a la EpCG en el presupuesto de AOD y alinearla con lo que señalaba el Consenso Europeo sobre el Desarrollo del año 2007 que recogía que los países de la UE debían de destinar hasta un 3% sobre el total de la AOD para actividades de “Educación para el Desarrollo y Sensibilización”⁸.

6. Focalizar los incrementos en el presupuesto educativo prioritariamente hacia aquellos colectivos más vulnerables.

El Gobierno español debe asegurar que el incremento del presupuesto 2021 en educación se dirige de manera prioritaria a aquellos colectivos más excluidos y vulnerables, y hacer honor al lema de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”. El esfuerzo del Gobierno ha sido relevante en este presupuesto 2021, incrementando la partida en educación un 7.5% respecto 2019, todavía sin contar con los fondos europeos de recuperación, lo cual es una buena noticia.

Con casi un tercio de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, el acceso a una educación inclusiva y de calidad es uno de los derechos que no es equitativo para toda la infancia. La educación pública en nuestro país no es realmente gratuita debido a la existencia de costes indirectos que afectan al rendimiento educativo (costes de comedor, refuerzo y ocio educativo, transporte, material escolar) y la pandemia ha puesto de relieve otras barreras a la educación, como la brecha digital, tanto de dispositivos y conectividad como de competencias y seguridad.

Cerrar la brecha digital, reducir las ratios de abandono y repetición, y potenciar un sistema educativo que esté orientado a desarrollar las competencias para responder a los retos del S. XXI, a la vez que se apoya directamente a las familias más vulnerables y al alumnado en riesgo de exclusión, son los retos más importantes de nuestro sistema educativo. El paulatino refuerzo del sistema de becas y ayudas al estudio, especialmente en los niveles de primaria y secundaria, así como el incremento de las plazas de infantil de titularidad pública o la formación docente en ámbitos tecnológicos y de educación para la ciudadanía global son vías de mejora que, si bien se incrementan en el presupuesto de 2021, tienen todavía un amplio margen de mejora.

Los fondos de recuperación europeos Next Generation EU que se deben aplicar entre 2021 y 2023 son una oportunidad enorme y única para diseñar un sistema educativo que no deje a nadie atrás. Según indica el *Plan de recuperación, transformación y resiliencia* del Gobierno español, la “educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades” es una de las diez “políticas palanca” que articulan el Plan, y concentrará el 18% de los 72.000 millones de euros que recibirá España. No obstante, sería necesario asimismo promover políticas de inclusión educativa contra todas las formas de segregación, combatir la desigualdad en el acceso y uso de las TIC, poner en marcha acciones para la promoción del éxito educativo y universalizar el acceso a la educación en la primera infancia.

⁸ Este porcentaje del 3% de la AOD para EpCG se señala por primera vez en 1993, en el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

7. Sin una adecuada atención a la profesión docente no habrá posibilidad de alcanzar una educación de calidad equitativa e inclusiva en España.

Los recortes que los servicios públicos han sufrido en la última década han debilitado el sistema público educativo. Un sistema del que depende que nuestro país afronte los enormes retos que plantea la Agenda 2030. A pesar de esto, la profesión docente ha sido un ejemplo de resiliencia: sin haber sido declarados profesión esencial durante la pandemia, han permitido mantener el pulso del aprendizaje en estos meses. Si queremos impulsar nuestra educación es lógico y necesario prestar especial atención a quienes están al frente en el día a día. Dentro de los tres planes que integran el Plan de Recuperación -de formación en capacidades digitales, de impulso de la formación profesional, y de modernización y digitalización del sistema educativo-, la formación permanente de nuestro profesorado debe ser un punto clave, así como mejorar los ratios alumnado/docente, y reforzar la formación en aquellas materias clave de cara a enfrentar los retos globales de la sostenibilidad medioambiental, social y económica, la igualdad de género y otras materias como la Educación para la Ciudadanía Global, que puede ser una de las llaves para asegurar sociedades más justas, solidarias e inclusivas.

8. Nuestro país debe seguir trabajando para aumentar los recursos internos disponibles para la educación y otros servicios públicos.

Unos impuestos progresivos y justos son el modo más solidario y realista para responder a los retos que tenemos como sociedad. En este sentido, desde la Coalición española de la CME se alienta una reforma continua de nuestro sistema impositivo que permita fortalecer los sistemas públicos y combata interna y en el exterior junto con sus aliados en la UE las lagunas legales que permiten la elusión y la evasión de impuestos por parte del sector privado, a través de los cuales los países en desarrollo pierden 138.000 millones USD al año⁹.

⁹ Devex, un sistema fiscal global justo, <https://www.devex.com/news/a-fair-global-tax-system-is-imperative-for-development-experts-say-90448>